



Proceso	Ejecutivo
Demandante	BBVA Colombia
Demandado	Agrosolutions JFJ S.A.S. y Juan David Londoño Posada
Radicado	05001 31 03 006 2023 00511 01
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Auto	No. 020
Decisión	Revoca
Tema	Requisitos de la demanda.
	<p><b>Exceso de ritual manifiesto.</b> En efecto, el artículo 472 de la ley 105 de 1931, más conocido como Código Judicial, sabiamente consagraba:</p> <p><i><b>“Los funcionarios del orden judicial, al proferir sus decisiones deben tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, y por consiguiente, con este criterio han de interpretarse las disposiciones procedimentales y las relativas a las pruebas de los hechos que se aduzcan como fundamento del derecho”.</b></i></p> <p>En vigencia de esta disposición, la Corte Suprema de Justicia en los años 1937 y 1938, sí, aquella que produjo en el país un giro antiformalista, profiriendo sentencias que dinamizaron la estática de la norma escrita y cuyas decisiones más relevantes fueron incluso la génesis de nuevas normas jurídicas, se expresó así:</p> <p><i><b><u>“Como el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por las leyes sustantivas, según lo enseña el art. 472 del C.J., con este criterio no solo han de interpretarse las normas procesales y probatorias conforme lo prescribe tal artículo, sino que también las súplicas del demandante y las defensas del demandado. Conocida claramente la intención de los litigantes, debe estarse a ella más que a lo literal de</u></b></i></p>

	<p><u>las palabras. Los jueces han de buscar el verdadero sentido de las pretensiones expuestas por las partes, aunque tengan que desatender el tenor literal de aquellas piezas cuando traicionan la intención inequívoca de quienes litigan. Si no fuera así, un peligroso criterio textualista sacrificaría el espíritu a la letra y el derecho a la fórmula</u>" (Cas. 18 de noviembre de 1937, XLV,844; 16 de noviembre 1951, LXX,795) – subrayas intencionales -.</p> <p>...</p> <p>De ahí que, proceder de la forma como lo hizo el <i>a quo</i>, es olvidar la esencia de los procedimientos, pero además, claro ejemplo del adagio latino "<i>summus jus, summa injuria</i>", pues de esa manera se lesionó el derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes, se itera, el respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en sí mismos, todo lo contrario, la primacía de lo sustancial, impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administración de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella.</p>
--	--

2024-020

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, dieciséis (16) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Se decide el recurso de apelación formulado por BBVA Colombia S.A. frente al auto proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín el 18 de enero del año en curso, dentro del trámite ejecutivo que adelanta en contra de Agrosolutions JFJ S.A.S. y Juan David Londoño Posada, mediante el cual se rechazó la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Correspondió por reparto al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, la demanda ejecutiva instaurada por BBVA Colombia S.A. en contra de la sociedad Agrosolutions JFJ S.A.S. y Juan David Londoño Posada, con el fin de que se librara mandamiento de pago, así:

1. Por la suma de \$888.888.889,00 como capital, contenido en el pagaré de Finagro Nro. 3509600186359, más los intereses que serán liquidados a la tasa máxima legal permitida desde el 10 de mayo del 2023.

2. Por la suma de \$233.333.333,00 como capital, contenido en el pagaré de Finagro Nro.3509600194858, más los intereses que serán liquidados a la tasa máxima legal permitida desde 21 de septiembre del 2023. (archivo 2)

2. Por auto del 29 de noviembre de 2023 se inadmitió la demanda a fin de que la parte demandante subsanara, entre otros, los siguientes requisitos:

i). De conformidad con lo consagrado en el numeral 4° del artículo 82 del C.G.P., se procederá a aclarar y/o ajustar en las **pretensiones** de la demanda, en lo siguiente:

- Se indicará en los numerales 1 y 2 del numeral primero del acápite de pretensiones, el concepto de los que provienen los valores –sic- por los que se pretende se libre mandamiento de pago.
- Adicionalmente, se evidencia que en los numerales antes mencionados, se indica que se pretende se libre mandamiento de pago, además de los intereses moratorios, también por “... *las costas, agencias en derecho, gastos y hasta su pago total...*”, lo cual coincide con lo solicitado en el numeral segundo del acápite de pretensiones, por lo que se especificará si corresponde a la misma solicitud, o se pretende un mandamiento de pago diferente.

ii). De conformidad con lo consagrado en el numeral 5° del artículo 82 del C.G.P., se procederá a aclarar y/o ajustar en los hechos de la demanda, lo siguiente:

- ....
- Se informará sobre las circunstancias de tiempo (fecha), modo (cómo), y lugar, en las que presuntamente se habrían realizado cada uno de los endosos en propiedad de los presuntos títulos valores que se presentan en esta acción ejecutiva.
- Teniendo en cuenta que los presuntos endosos en propiedad se habrían realizado mediante una firma, se indicará, por una parte, si las personas que los realizaron contaban con facultades para realizar los mencionados endosos; y por otra, si dichas firmas son las utilizadas por las personas autorizadas para realizar dichos endosos, y se acreditarán dichas circunstancias de manera siquiera sumaria.
- Se pondrá en conocimiento las circunstancias de tiempo, modo, lugar o forma, en las que se le habría puesto en conocimiento a los demandados los endosos en propiedad de las presuntas obligaciones base de esta ejecución; y se aportará evidencia de ello.
- ...
- Se deberá indicar si el plazo y/o las condiciones de las presuntas obligaciones que aquí se pretenden ejecutar, han variado en algún aspecto, forma, plazo, valores, entre otras; y en caso afirmativo, hacer las menciones correspondientes; máxime teniendo en cuenta que los documentos base de la ejecución habrían sido endosados en propiedad en dos ocasiones; y en caso afirmativo se aportarán las evidencias de ello.
- En caso de que las presuntas obligaciones hayan variado, o novado, se indicará en los hechos de la demanda el valor y la tasa de intereses que se habrían actualizado, en caso de que ello se hubiera presentado, y se aportará evidencia siquiera sumaria de ello.
- Se pondrá en conocimiento cual habría sido la tasa de intereses corrientes o remuneratorios que fue pactada o aplicada para cada presunta obligación, producto, y/o servicio financiero que se haya incluido en cada presunto pagare, y se aportará evidencia siquiera sumaria de ello.
- Se aclararán los numerales 1 y 2 del hecho primero, ya que allí se relacionan unas presuntas fechas de vencimiento de las presuntas obligaciones, pero ello no coincidiría con lo que registra en los documentos base de la ejecución pretendida.
- ...
- Se indicará porque en el anexo 2, correspondiente al presunto documento de aceptación de garantías del Fondo Nacional de Garantías, que estaría continuo a uno de los pagarés, se encuentra en blanco el espacio para diligenciar el nombre de quien aprobó la operación. (archivo 3)

**3.** El mandatario judicial de la parte demandante allegó escrito aduciendo subsanar uno a uno los requisitos pedidos, sin

embargo, por auto del 18 de enero pasado el *a quo* consideró que no se atendió en forma completa y adecuada los requerimientos contenidos en el auto inadmisorio y rechazó la demanda, por cuanto:

(i) Se evidenció en los numerales 1 y 2 de la pretensión primera, el librar mandamiento de pago, además de los intereses moratorios, también por “...*las costas, agencias en derecho, gastos y hasta su pago total...*”, frente a dicho requisito se indicó “*corresponde a misma solicitud, y por tanto, la parte demandante no está que se libre mandamiento de pago por esos conceptos...*”. Sin embargo, en el numeral vi) del auto admisorio, se advirtió que debía allegar el cumplimiento de los requisitos planteados, integrados en un nuevo escrito de demanda, pero no se hizo, puesto que se dejó exactamente la misma redacción de las pretensiones que tenía la demanda inicial.

(ii) Tampoco se dio cumplimiento a lo exigido en el literal ii), por cuanto “varias de las manifestaciones con las que se pretendían subsanar esas deficiencias de la demanda inicial, solo fueron mencionadas en el memorial que se aportó para adjuntar el texto de la demanda presuntamente subsanada, pero en el CONTENIDO del escrito de demanda supuestamente NO SE PLASMARON, como se había requerido a la parte demandante se efectuara conforme al requisito del numeral vi) del auto inadmisorio”, es por lo que no es posible tener como adecuada y completamente cumplidas las exigencias del inadmisorio en dichos aspectos. (Subrayas y mayúsculas propias del texto)

(iii) Frente a la tasa de intereses, la información suministrada no coincide con los documentos aportados con la demanda, puesto que la tasa de interés por la que el despacho indagaba en la inadmisión, es otra completamente diferente a la indicada. (archivo 5)

**4.** Inconforme con la decisión el apoderado de la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación con fundamento en que

(i) En el nuevo libelo se aclararon los valores pretendidos en el inciso primero y segundo de las pretensiones, y si bien cierto, que no se adecuó lo relacionado a las costas, agencias en derecho y gastos, consideró que con la explicación dada en el memorial de subsanación era suficiente.

(ii) Respecto a los catorce requisitos en el segundo requisito, tal y como lo advierte el despacho se cumplieron con todas las aclaraciones, y que no todas se hicieron en el nuevo escrito de demanda, porque consideró que era innecesario.

(iii) En relación con los intereses se están solicitando los de mora, sin que exceda el máximo legal como lo autoriza la ley.

(iv) Frente al requisitos III, adjunto por ambos lados cada pagaré, faltando la escritura pública 242 de 2013, mediante la cual FINAGRO le otorga poder al Dr. Néstor León Ceballos para realizar los endosos, sin embargo, tal y como se indicó en el numeral segundo, dicho requisito es excesivo y en nada afecta la legitimidad de cada título valor.

(v) En cuanto al cuarto (4º) requisito se cumplió a cabalidad y el quinto (5º), señaló que no tiene razón de ser, por cuanto el mismo no tiene fundamento legal y jurisprudencial que indique que se deba allegar certificado de libertad y tradición o registro mercantil para solicitar una medida cautelar. (archivo 8)

**5. La impugnación horizontal fue resuelta de manera negativa en auto del 5 de febrero último, por considerar que**

(i) En cuanto al punto dos del requisito i) que menciona las cosas y agencias en derecho, dicho requisito tiene sustento en el numeral 2º del artículo 96 del C. General del Proceso, y por tanto se debió hacer el correspondiente pronunciamiento.

(ii) Con relación a lo solicitado en el requisito iii) dada la existencia de los endosos, se solicitó la escritura 242 de 2013 y no la aportó.

(iii) Sobre la tasa de interés, existe una contradicción en la información suministrada, lo que eventualmente podría llevar a confusiones,

bastaba con que la parte demandante hubiera optado con no realizar dicho cobro.

(iv) En el requisito iii) se solicitó cierta información y evidencia siquiera sumaria de ello, con el fin de validar que la información y los trámites que eventualmente se hubiesen realizado frente a los pagarés, se hayan hecho en debida forma, y por quienes tienen la facultad legal para hacerlo. (archivo 9)

**6.** Concedida la impugnación vertical, el expediente fue remitido a la corporación, la que decide lo propio, previas las siguientes

## **II. CONSIDERACIONES**

**1.** En lo que respecta a los motivos por los cuales el juez rechazó de plano la demanda referida, al concluir que no se había dado cumplimiento a las exigencias pedidas, señala el Tribunal que el proceso civil, en virtud del derecho de acción se materializa a través de la demanda, como medio previsto por la ley para garantizar, con el cumplimiento de los requisitos señalados en ella que el proceso podrá adelantarse sin que culmine luego, con sentencia inhibitoria

Es por ello, que la demanda debe ajustarse a determinados requisitos establecidos de manera general en el artículo 82 del Código General del Proceso, y específicamente para algunos tipos de procesos en el artículo 83 ibídem

**2.** La exigencia de estos requisitos encuentra su razón de ser, al considerarse que la demanda es un acto de postulación, a través del cual la persona que la impetra, ejercita un derecho frente al Estado, pone en funcionamiento el aparato judicial y propicia, la iniciación de una relación procesal.

Por consiguiente, si la demanda cumple con las formalidades que la ley establece, deberá ser aceptada, de lo contrario será inadmitida para que sea subsanada dentro del término de cinco (5) días o ser rechazada, tal y como lo prevé el artículo 90 ib., pues el rechazo de la demanda impone al juez la obligación de verificar si las formalidades previstas por el legislador han sido satisfechas al momento de ejercer el derecho de acción.

3. Luego, la norma es clara al señalar que “*sólo*” en los eventos enumerados procede la inadmisión, es decir, que las causales son de naturaleza restrictiva, pues lo que quiso reiterar el legislador con el nuevo estatuto procesal, fue garantizar la tutela judicial efectiva, esto es, que el ciudadano pudiera acudir ante la jurisdicción, sin ninguna traba, en procurar de la resolución de los conflictos intersubjetivos de intereses.

4. La providencia que declara la inadmisión y el posterior rechazo no es más que manifestación de la clásica contradicción entre la aplicación de la ley de manera estricta, el formalismo y la prevalencia de derechos sustanciales, de la realidad sobre la forma, el antiformalismo, tal y como lo sostuvo este Magistrado en época pretérita<sup>1</sup>, y no se trata de un asunto que haya tenido eco en el artículo 228 de la Constitución como suele creerse.

En efecto, el artículo 472 de la ley 105 de 1931, mas conocido como Código Judicial, sabiamente consagraba:

---

<sup>1</sup> Aclaración de voto. Nro 5. Medellín, 13 de abril de 2007. Ordinario de GASPAR ALEMANY FERRER contra BEATRIZ ELENA y MARISOL PARRA CARDONA. M.P. MARÍA E. PUERTA M. Rdo. 05360 31 002 2004 00187 01



***“Los funcionarios del orden judicial, al proferir sus decisiones deben tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, y por consiguiente, con este criterio han de interpretarse las disposiciones procedimentales y las relativas a las pruebas de los hechos que se aduzcan como fundamento del derecho”.***

En vigencia de esta disposición, la Corte Suprema de Justicia en los años 1937 y 1938, sí, aquella que produjo en el país un giro antiformalista, profiriendo sentencias que dinamizaron la estática de la norma escrita y cuyas decisiones más relevantes fueron incluso la génesis de nuevas normas jurídicas, se expresó así:

***“Como el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por las leyes sustantivas, según lo enseña el art. 472 del C.J., con este criterio no solo han de interpretarse las normas procesales y probatorias conforme lo prescribe tal artículo, sino que también las súplicas del demandante y las defensas del demandado. Conocida claramente la intención de los litigantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Los jueces han de buscar el verdadero sentido de las pretensiones expuestas por las partes, aunque tengan que desatender el tenor literal de aquellas piezas cuando traicionan la intención inequívoca de quienes litigan. Si no fuera así, un peligroso criterio textualista sacrificaría el espíritu a la letra y el derecho a la fórmula”*** (Cas. 18 de noviembre de 1937, XLV,844; 16 de noviembre 1951, LXX,795) – subrayas intencionales -.

5. En conclusión, como dijo la Corte Constitucional en Sentencia C-833 de 2002 *“...tampoco puede decirse que el juez que tiene a su conocimiento la demanda, puede inadmitirla bajo criterios puramente subjetivos, pues las causales de inadmisión son taxativas, se encuentran específicamente señaladas en el precepto demandado y no le es posible a un juez inadmitir una demanda, sin que el auto que ordena la inadmisión sea debidamente fundamentado, tan es así que fue el propio legislador quien en su obligación de ejecutar el mandato social,*

*contenido en la Constitución, estableció para los funcionarios judiciales el deber de respetar, garantizar y salvaguardar los derechos de quienes intervienen en el proceso (artículo 9 ley 270 de 1996)”.*

Por lo demás el artículo 11 de la codificación procesal vigente reitera que: *“Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias.”*

Todo lo anterior porque en ese contexto, al rechazarse la demanda se puede causar un quebranto irremediable al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, por lo que el juez debe ser extremadamente cauteloso al verificar el cumplimiento de los requisitos que permiten su trámite.

6. Luego, el decir que se librara mandamiento por las *“las costas, agencias en derecho, gastos y hasta su pago total...”*, se informara sobre las circunstancias de *“tiempo (fecha), modo (cómo) y lugar, en las que presuntamente se habrían realizado cada uno de los endosos en propiedad de los títulos valores”*; si las *“personas que los realizaron contaban con facultades para realizar los mencionados endosos”*, si dichas *“firmas son las utilizadas por las personas autorizadas para realizar dichos*

endosos”, que se “aportara evidencia de ello”; que se indicara “si el plazo y/o las condiciones de las presuntas obligaciones habrían variado”; que se “indicara cuál sería la tasa de interés”; también “porque en el anexo 2, correspondiente al presunto documento de aceptación de garantías del Fondo Nacional de Garantías que estaría continuo a uno de los pagarés, se encuentra en blanco el espacio para diligenciar el nombre de quien habría aprobado la operación”; no daban lugar a que se rechazara la demanda, toda vez que la misma se limitaba al estudio de los títulos valores aportados a fin de que si estos llenaban las exigencias de los artículos 619 y s.s. del C. de Comercio, como también del artículo 709 de la misma codificación, era suficiente para que se procediera con la orden de apremio.

De ahí que, proceder de la forma como lo hizo el *a quo*, es olvidar la esencia de los procedimientos, pero además, claro ejemplo del adagio latino “*summus jus, summa injuria*”, pues de esa manera se lesionó el derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes, se itera, el respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en sí mismos, todo lo contrario, la primacía de lo sustancial, impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administración de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella.

7. Sentadas las precedentes premisas teóricas en el caso de estudio, la sala observa que, era improcedente, exigir esa multiplicidad de requisitos y, luego, rechazar la demanda, porque las irregularidades que fueron expuestas por el *a quo*, no constituían causales de inadmisión, ya que en absoluto referían al

incumplimiento de alguno de los requisitos del artículo 90 del C. General del Proceso.

**8.** Significa lo atrás expuesto, que el *a quo*, al momento de abordar el estudio del libelo dejó a un lado el deber que le asistía de revisar de manera sistemática y en conjunto tal escrito, para establecer la coherencia entre los segmentos que la integran, razón por la cual, las exigencias echadas de menos en el auto censurado contienen un formalismo excesivo e inocuo, que no se compadece con la finalidad y estructura que exige el ordenamiento jurídico.

Lo trascendental era que las pretensiones se hubieran solicitado con claridad, precisión y por separado y se hubiere expuesto los hechos en que se fundamentaba, lo cual se observa para el asunto atendido, a pesar de los posibles defectos, a lo que se suma que el artículo 430, claramente señala que presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará el mandamiento ejecutivo ordenando el cumplimiento de la obligación en la forma pedida siempre que fuere procedente, o en la que el mismo funcionario considere legal, pero esa disconformidad entre lo pedido y el ordenamiento jurídico no da pie para inadmitir, y mucho menos, rechazar la demanda.

**9.** Así las cosas no hay duda de que el juzgado de primer grado con su actuar lesionó los derechos al debido proceso de la demandante y acceso a la administración de justicia de la convocante, por lo que

se revocará el auto recurrido, para en su lugar disponer que se haga un nuevo estudio del libelo subsanatorio para determinar su admisibilidad, tomando de presente las observaciones realizadas en precedencia.

**III. DECISION**

**PRIMERO:** Por lo expuesto el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, **REVOCA** el proveído objeto de apelación por las razones que fueron expuestas en la parte motiva de esta providencia y en su lugar dispone, que el *a quo* proceda a proferir el auto que corresponda haciendo abstracción de los argumentos contenidos en el auto recurrido.

**NOTIFIQUESE**

**JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO**  
**Magistrado**

Firmado Por:  
Juan Carlos Sosa Londono  
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional  
Sala 001 Civil  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fa728934844481b93c62cacadd11b53792bce0937f57a737bbce40cf9f99c0f8**  
Documento generado en 17/04/2024 08:16:39 a. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>